



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010024035 DEL 09/07/2014
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,
en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y
en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual "*se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones*", es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que "*La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior.*"

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de Santa Sofía, del departamento de Boyacá, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010009005, del 31 de marzo de 2014, la SSPD decidió **DESCERTIFICAR** al municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

a. Reporte al SUI de la suscripción de los contratos en la zona urbana a que se refiere el artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 11 del Decreto 565 de 1996 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, o alguno de los siguientes documentos que soporten:

- a) Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
- b) Giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PDA.
- c) Certificación del prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del giro de los subsidios en la respectiva vigencia.

En caso que el municipio sea prestador directo de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, para cumplir con este criterio deberá reportar al SUI, respecto de los servicios que preste directamente, la certificación emitida por el tesorero municipal o quien haga sus veces donde conste el traslado contable de los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos a las cuentas separadas donde se lleva la contabilidad de los servicios públicos domiciliarios que presta el municipio de manera directa y para cada uno de los mismos.

b. Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010009005 del 31 de marzo de 2014

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010009005, del 31 de marzo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de Santa Sofía, del departamento de Boyacá, mediante el oficio No. SSPD 20144010177211, del 31 de marzo de 2014, enviado por correo certificado el 3 de abril de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010009005, del 31 de marzo de 2014, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010200481. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. éste documento fue entregado el 16 de abril de 2014, en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor William Gustavo Parra Merchán, en su calidad de alcalde del municipio de Santa Sofía, del departamento de Boyacá, mediante documentos radicados en esta entidad bajo los números SSPD 20145290219122 y 20145290281972 del 2 y 30 de mayo de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010009005 del 31 de marzo de 2014.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por lo interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de Santa Sofía, del departamento de Boyacá, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20145290219122, del 2 de mayo de 2014, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

Respecto del escrito radicado con el No. SSPD 20145290281972, del 30 de mayo de 2014, no se estudiara de fondo toda vez que mismo fue presentando de forma extemporánea, por cuanto los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal efectuada el 16 de abril del año en curso, en los que subsistía la oportunidad de interponer el recurso de reposición, expiraron el día 5, de mayo de 2014.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"En cuanto al primer cargo relacionado con haberse acreditado el giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, resulta explicable por el hecho de que es el Municipio de Santa Sofía el prestador directo de dichos servicios y en esa medida está exento de la acreditación de dicho giro por cuanto maneja directamente, a través de la Tesorería Municipal, los recursos para atender los referidos servicios públicos domiciliarios, situación que resulta totalmente clara y no amerita mayores disquisiciones al respecto.

Frente a la segunda situación a que alude la resolución impugnada, esto es, no realizar el giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en donde certifique el monto del giro de los recursos destinados al pago de los subsidios en la respectiva vigencia, debemos señalar que esta situación se explica por el hecho de que solamente hasta comienzos del mes de octubre del año 2012 se aprobó la estructura tarifaria de los servicios de acueducto y alcantarillado para el Municipio de Santa Sofía, mediante la Resolución No. 204 del 10 de octubre de 2012, expedida por el Alcalde Municipal, lo cual significa que solamente se cobraron subsidios por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, los cuales le fueron girados a la Unidad de Servicios Públicos en el año siguiente, esto es, en 2013, tal como lo certifica la señora Tesorera Municipal y el Contador Público externo del Municipio de Santa Sofía, en documentos cuyas copias nos permitimos aportar como pruebas.

Estos recursos se manejaron en las cuentas especiales dispuestas para el efecto, pero por error involuntario en el cargue de la información no se reportó al SUI en forma oportuna y por ello no aparece registrada en el sistema. No obstante el Municipio de Santa Sofía ya solicitó al Coordinador del SUI reversar el cargue relacionado en los tópicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en cuanto a las respectivas certificaciones de asignación de recursos FSRI para los tres servicios, justamente porque la información que se encuentra reportada no refleja la información del giro de los subsidios que se realizó para la vigencia 2012, cuya copia se anexa con este escrito impugnatorio, junto con el pantallazo del radicado de la solicitud, la cual es técnicamente viable para casos como éste.

Consideramos que con esta explicación y la solicitud de reversión en comentario, se aclara totalmente este punto, demostrando que objetivamente no se omitió la obligación del giro de los subsidios de la Unidad de Servicios Públicos de Santa Sofía, a través del Fondo de Redistribución de Ingresos a las cuentas especiales de la unidad, y en esta medida no se violó la normatividad que así lo dispone, solo que no se reportó en debida forma la información, pero ello se subsana con la solicitud de reversión ya mencionada, razón por la cual solicitamos se tenga en cuenta esta explicación exoneratoria, frente al cargo al que nos venimos refiriendo y se tenga por satisfecho este requisito para efectos de la certificación del manejo de los recursos de agua potable y saneamiento básico.

Así mismo, no sobra decir que desde octubre de 2012, el municipio ha venido dando cumplimiento al giro de los subsidios de los servicios de AAA, es decir, a la fecha se está dando cumplimiento a esta obligación legal.

Ahora bien. Respecto al cargo relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, si bien también por error involuntario se reportó un Acuerdo Municipal del año 2011, es decir de la anterior administración, cuando efectivamente el Concejo Municipal no tenía competencia para ello, tal situación se subsanó por completo, concretamente el 10 de octubre de 2012, cuando se reunió la Junta Municipal de Servicios Públicos de Santa Sofía y aprobó la implementación de la estructura tarifaria de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, tal como consta en la copia de acta que se acompaña a este recurso, la cual se complementó con la expedición de la Resolución No. 204 del 10 de octubre de 2012, emanada del Despacho de la Alcaldía Municipal de Santa Sofía, mediante la cual se adoptaron los estudios

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

tarifarios para dichos servicios, siendo el Alcalde Municipal la autoridad competente para ello, en su calidad de Presidente de la Junta Municipal, en la medida en que el Municipio es el prestador directo de los servicios públicos en este municipio, acto administrativo que igualmente se aporta para que sirva de prueba dentro del presente trámite administrativo.

Al respecto debemos señalar que igualmente la administración municipal de Santa Sofía solicitó al Coordinador del SUI la reversión de los tópicos correspondientes al cargue de la información relacionada con el acto de aprobación de las tarifas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del año 2012, para en su lugar ser remplazadas con los actos administrativos acabados de mencionar, en solicitud cuya copia se anexa a este respetuoso escrito junto con el pantallazo del radicado de dicha solicitud de reversión.

En estas condiciones consideramos con fundadas razones que con la aprobación por parte de la Junta Municipal de Servicios Públicos de la estructura tarifaria y la expedición por parte del funcionario competente del acto administrativo mediante el cual se adoptó el estudio tarifario, se satisface plenamente en requisito que echa de menos la resolución impugnada, lo cual sumado al hecho de haberse solicitado la revisión y la sustitución ante el SUI, purga de legalidad la inconsistencia en el cargue de la información y así respetuosamente solicitamos se declare por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, declarando con ello desestimando el presunto incumplimiento del Municipio de Santa Sofía en este aspecto.

De conformidad con lo acabado de reseñar se advierte claramente que el Municipio de Santa Sofía cumplió a cabalidad con los requisitos para obtener la certificación del manejo de los recursos de agua potable y saneamiento básico correspondientes al año 2012, solo que se presentaron los retrasos naturales debido a que solamente se implementaron las tarifas en los últimos tres meses de dicho año y por tanto los recursos se giraron solo hasta la vigencia siguiente, como se acredita con los anexos que se acompañan a este recurso de reposición y adicionalmente por error involuntario, se incurrió en inconsistencias en el cargue de la información como se acaba de reseñar, pero ello, se insiste, fue subsanado por la administración municipal, solicitando la reversión de los cargues y realizando las correcciones pertinentes.

Por ello, consideramos que no hubo de parte de esta administración el ánimo deliberado de sustraernos a las obligaciones que nos competen frente a la prestación de los servicios públicos a nuestro cargo y por el contrato se cumplió objetivamente con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente frente a la obtención de la certificación del manejo de los recursos de agua potable y saneamiento básico, tal como se advierte con los documentos que se aportan como pruebas, razón por la cual solicitamos de manera respetuosa tener en cuenta las acciones y gestiones adelantadas por parte del municipio de Santa Sofía dentro del proceso de certificación vigencia 2012, pues con ello se demuestra nuestra preocupación por cumplir con nuestras obligaciones al respecto, lo cual devela nuestra total inocencia frente a las presuntas omisiones que se nos endilgan en el acto administrativo impugnado.

Sobre el particular se debe tomar en consideración que el Municipio de Santa Sofía actuó en este caso con diligencia, en la medida de sus precarias posibilidades, por ser uno de los municipios más pequeños del país y con menos presupuesto, pero además totalmente de buena fe, por lo que solicitamos se nos aplique este principio, por cuanto contrario a lo sostenido en la Resolución objeto de recurso en el sentido de que esta entidad territorial no cumplió con los requisitos, dicha afirmación se desvirtúa con las pruebas que se allegan en esta oportunidad, las cuales demuestran nuestra preocupación en torno al cumplimiento de dichas obligaciones, que objetivamente quedaron satisfechas, aspectos que solicitamos se tengan en cuenta por parte de la Superintendencia al momento de desatar el recurso.

Acreditar que la infracción de una norma que contiene una obligación de hacer tiene un carácter concreto y específico a partir de su complementación con una regla que le permita determinar de manera específica su contenido normativo, describiendo con claridad cuál es el deber, mandato o prohibición que fue desconocido por el servidor público o por los particulares en los casos previstos en la ley, lo cual no se hizo sino en forma abstracta y al respecto ha señalado la H. Corte Constitucional que para ello, es indispensable demostrar que a pesar de tener la conducta reprochable su origen en un principio, la misma se desarrolla conforme a una norma constitucional de aplicación directa y que cuando se formule la acusación debe señalarse tanto la conducta imputable como la norma que la describe. Así las cosas, no es suficiente la simple manifestación de haber vulnerado una norma sino que resulta exigible su descripción y determinación conforme a la

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

disposición de rango legal o al precepto constitucional de aplicación directa que le sirve de complemento.

Al respecto debemos señalar que resultan valiosos los aportes de nuestra máxima Corporación encargada de la guarda de la Carta Política que sobre el particular ha señalado:

"Finalmente, y teniendo en cuenta que el derecho disciplinado, como lo ha reconocido esta Corporación en sentencias C-1076 de 200M.P. Clara Inés Vargas Hernández. , C-125 de 200M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-796 de 200M.P. Rodrigo Escobar Gil , se somete al principio constitucional de proporcionalidad (CP. arts. 10, 20 y 13), es obligación del funcionario investigador determinar si el comportamiento reprochable en materia disciplinaria resulta excesivo en rigidez frente a la gravedad de la conducta tipificada. De igual manera, le corresponde a dicho funcionario determinar si la irregularidad imputada al servidor público o al particular, se ajusta al principio de antijuridicidad material o lesividad reconocido por el legislador en la exposición de motivos de la Ley 734 de 2002, y hoy en día previsto en el artículo 5° de la citada ley, según el cual: "el quebrantamiento de la norma sólo merece reproche disciplinario cuando la misma está concebida para preservar la función pública, y la infracción, en el caso concreto, la vulnera o la pone en peligro".

Sobre al particular la jurisprudencia disciplinaria, aplicable plenamente a este tipo de casos por ser parte del derecho sancionatorio, ha sido reiterativa en señalar que debe existir un nexo funcional derivado del deber específico que le compete y además psicológico entre el autor y la conducta enlizada, como también una actuación dolosa o culposa del implicado para poder atribuir responsabilidad disciplinaria y derivar de ella una sanción de esa naturaleza, tal como lo reseñan los apartes que a continuación se transcriben:

" La faltas son sancionables a título de dolo o culpa, por lo que para declarar la responsabilidad disciplinaria se requiere establecer el nexo psicológico entre el autor y la conducta, dado que se recauda a través del examen de sus actitud frente al deber que le corresponde en relación con el asunto que se juzga, su grado de libertad en el caso concreto (exigibilidad de la conducta), y el conocimiento de la ilicitud del comportamiento (modalidad dolosa); y la observancia del cuidado necesario en el desarrollo de sus funciones oficiales, criterio valedero para determinar la conducta culposa". (Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de a Judicatura, sentencia del 16 de octubre de 1997, Magistrado Ponente, Dr. Edgardo José Maya Villazón).

Es tan garantiza el derecho sancionatorio que incluso exige la demostración del dolo o de la culpa como requisito sine qua non para imponer una sanción, pues lega a aceptar que aún en los casos en que se acredita el quebrantamiento de la ley, debe existir la demostración del actuar doloso o imprudente del servidor público que genere el reproche, tal como lo señaló la Viceprocuraduría General de la nación en la conocida providencia del 19 de diciembre de 2001, cuando con ponencia del Dr. Carlos Arturo Gómez Pavajeai", señaló:

" Sin duda alguna, objetivamente se quebrantó la ley; empero, subjetivamente nunca estuvo en la mente de la acusada la conciencia de tal quebrantamiento, y soslayar este aspecto comporta, sin más, tal como lo afirmó el magistrado disidente en el fallo del a quo, deducción de la más crasa de responsabilidad objetiva, proscrita constitucionalmente, como se ha sostenido invariablemente por esta sala, por el artículo 29 de la Carta Política al consagrar la palabra "acto", denotativo de conciencia y voluntad en el proceder del ser humano, notas distintivas del principio de la dignidad que sirve de sustento al orden político – jurídico (art. 1°ibid); exigencias reiteradas por el artículo 2 del Decreto 2700 de 1991.

Varios aspectos, en tanto el acusador y fallador a quo quedaron imbuidos en la nota objetiva del cuestionamiento disciplinario, fueron olvidados, y apuntan que todo fue un error de interpretación, de buena fe y exento de culpa, esto es, excusable, con poder suficiente para destruir la estructuración del hecho punible disciplinario"

Consideramos con fundadas razones que a existir pruebas que demuestran fehacientemente que el Municipio de Santa Sofía cumplió con las obligaciones que se hechan de menos en la resolución impugnada y en tales condiciones la medida descertificatoria resulta no solo desproporcionada, sino principalmente injusta, por cuya razón solicitamos de manera respetuosa se reponga la decisión impugnada y se permita que el Municipio de Santa Sofía se certifique en agua potable y saneamiento básico por cuanto cumple con todos los requisitos establecidos por la ley para ello, con lo cual además se seguir beneficiando a los sectores más vulnerables de nuestra población que requieren de acciones tangibles de su gobernante local en materia de servicios públicos.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Con fundamento en los anteriores argumentos que corresponden estrictamente a la verdad, con todo respeto nos permitimos solicitar REPONER la Resolución No. SSPD – 20144010009005 del 31 de marzo de marzo de 2014, proferido por su Despacho dejándola en consecuencia sin efectos, con lo cual se beneficiará no solo la administración municipal que represento, sino principalmente la comunidad de esta localidad, destinataria de los recursos del Sistema General de Participaciones en agua potable y saneamiento básico.

SOLICITUD ESPECIAL DE NULIDAD

Manifestamos al señor Superintendente Delegado que en caso que los argumentos expuestos en precedencia, sustentados en las pruebas allegadas, por alguna circunstancia no sean de recibo para su Despacho, solicitamos de manera respetuosa se declare la NULIDAD de lo actuado dentro del presente trámite administrativo, por cuanto consideramos que por tratarse de una decisión sancionatoria para el Municipio que represento, se le debió dar aplicación al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, es decir se debió garantizar el debido proceso consagrado en esta norma superior para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, garantizándole a esta entidad territorial, destinataria de la sanción, el derecho fundamental de defensa, con lo cual se nos hubiese permitido aportar un importante caudal probatorio para desvirtuar las omisiones de las que se nos acusan, pero de las solo tuvimos conocimiento cuando se notifica el acto sancionatorio, situación que consideramos que riñe con el principio constitucional del debido proceso, por cuya razón consideramos que se debe rehacer la actuación para que se nos permita ejercer nuestro derecho de defensa en este caso.

Reiteramos si que esta solicitud especial de nulidad solamente tendrá cabida en el caso que no acepte nuestra petición de revocatoria de la decisión impugnada"

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado No. SSPD 20145290219122 del 2 de mayo de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Certificación expedida por la tesorera municipal de Santa Sofia, de fecha 28 de abril de 2014, en la cual hace constar el giro del pago por concepto de subsidios a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios.

3.3.2. Certificación expedida por el contador del municipio de Santa Sofia de fecha 29 de abril de 2014, en la cual se expresa que los subsidios fueron girados a la Unidad de Servicios Públicos desde el FSRI.

3.3.3. Acta No. 001 de 2011 de reunión de la Junta Municipal de Servicios Públicos.

3.3.4. Resolución No. 024 de 10 de octubre de 2012, por medio del cual se aprueban y adoptan los estudios tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la unidad de servicios públicos domiciliarios del municipio de Santa Sofia.

3.3.5. Tres oficios de fecha 28 de abril de 2014, dirigidos al Coordinador del Grupo SUI, en los cuales se solicita la reversión de los formatos certificación asignación de recursos FSRI y acto de aprobación de tarifas, del año 2012.

3.3.6. Dos pantallazos correspondientes a correos remitidos por la SSPD en los cuales se asigna un número de radicado.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio relacionado con la puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos- FSRI.

Manifiesta el recurrente, que por ser el municipio de Santa Sofía prestador directo de los servicios públicos domiciliarios, está exento de la acreditación del giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, por cuanto maneja directamente los recursos para atender los referidos servicios públicos.

De otra parte alega el impugnante, que el municipio solicitó al Coordinador del SUI revertir el cargue del formato "CERTIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE RECURSOS FSRI AAA PDF" para los tres servicios, porque la información que se reportó no reflejaba la información del giro de los subsidios que se realizó para la vigencia 2012, razón por la cual adjuntó a la solicitud en comento y al recurso, certificaciones en las que se aclara tal giro.

Esta superintendencia, mediante oficio radicado No. SSPD 20144010247301, del 12 de mayo de 2014, trasladó el argumento señalado por el recurrente, relacionado con el giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), toda vez que se constituye como la autoridad competente para verificar el cumplimiento de éste requisito.

Ahora bien, mediante radicado No. SSPD 20145290309372, del 12 de junio de 2014, el Director de Desarrollo Sectorial del MVCT, manifestó lo que sigue:

Recibimos el oficio del asunto mediante el cual remite el recurso de reposición interpuesto por el municipio de Santa Sofía - Boyacá, en contra de la descertificación para la administración del SGP-APSB para la vigencia 2012, en cuyos fundamentos de la decisión se encuentra el incumplimiento del aspecto "Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos"

Al respecto, me permito manifestarle que la metodología utilizada para la acreditación del mencionado requisito consistió en la revisión de la información reportada en el FUT en la categoría de "Ingresos y gastos de inversión", de la vigencia 2012 del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, con corte al 15 de abril del 2013, plazo extemporáneo aprobado mediante Resolución No. 194 de 2012 expedida por la Contaduría General de la Nación.

En relación con lo anterior y para el caso del literal a) "Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. b) Giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PAD. (...) d) Reporte al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios". El Ministerio remitió mediante comunicación No. 7312-3-69983 del 27 de septiembre de 2013, el cumplimiento de dichos criterios para la certificación de los Municipios y Distritos.

Para el caso del literal d) "Reporte al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios" este Ministerio verificó en la categoría "Gastos de inversión" que los municipios y distritos hayan reportado en el FUT, las ejecuciones presupuestales por concepto de subsidios en la vigencia 2012, a nivel de compromisos con cargo a la fuente de recursos denominada

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

SGP: agua potable y saneamiento básico - once doceavos vigencia actual + última doceava de la vigencia anterior.

En este orden de ideas, a continuación presentamos un resumen de los argumentos expuestos por el municipio de Santa Sofía - Boyacá en el recurso de reposición interpuesto ante la SSPD, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en el Decreto 1839 de 2013.

Argumentos del recurrente:

"En cuanto al primer cargo relacionado con haberse acreditado el giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, resulta explicable por el hecho de que es el Municipio de Santa Sofía el prestador directo de dichos servicios y en esta medida está exento de la acreditación de dicho giro por cuanto maneja directamente, a través de la Tesorería Municipal, los recursos para atender los referidos servicios públicos domiciliarios, situación que resulta totalmente clara y no amerita mayores discusiones al respecto (...)"

Posición del Ministerio:

Aunque ninguno de los argumentos presentados por la entidad territorial pretende desvirtuar o controvertir el reporte de información al FUT, ésta Ministerio procederá a verificar los siguientes aspectos.

- a) "Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo"

Para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales a) es preciso remitirse a la SSPD remitirse a la comunicación enviada por este Ministerio con Radicado No. 7312-3-89983 del 27 de septiembre de 2013, donde se informaron los resultados del reporte FUT de "Ingresos" y "Gastos de inversión" y el reporte de ejecuciones presupuestales por concepto de subsidios por parte de los distritos y municipios del país, en el sentido de allegar la información relacionada con el pago de subsidios por parte de las entidades territoriales en la vigencia 2012, mediante la figura de giro directo a personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, prevista en el artículo 13 de la Ley 1176 de 2007 y reglamentado en el artículo 34 y 35 del Decreto 1040 de 2012.

En ese orden de ideas en lo correspondiente al compromiso de subsidios debe manifestarse que el requisito "a: giro directo", no le aplicable al municipio al ser prestador directo. El criterio "d) Reporte al FUT en la categoría gastos de inversión del compromiso de subsidios", como se mencionó mediante comunicación No. 7312-3-89983 del 27 de septiembre de 2013, el municipio no lo reportó en el FUT, por lo tanto no se acredita el cumplimiento del aspecto.

Cordial saludo,


JAVIER ORLANDO MORENO MÉNDEZ
Director de Desarrollo Sectorial

W Por: Oscar Javier Ramírez, Coordinador Grupo de Monitoreo SGP
Ejecutor: Patricia Peña Contreras ODS
Fecha: Junio de 2014.

En lo atinente a la certificación emitida por el tesorero municipal o quien haga sus veces, donde conste el traslado contable de los recursos del FSRI a las cuentas donde se lleva la contabilidad de los servicios públicos, esta superintendencia encontró que el municipio de Santa Sofía reportó en el SUI, el 27 de julio y 15 de agosto de 2013, en el formato "CERTIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE RECURSOS FSRI AAA PDF" del año 2012, una certificación para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, emitida por la secretaria de hacienda del municipio, sin embargo no fue tenida como válida dentro del proceso de certificación que nos ocupa, toda vez que en la misma no consta el traslado contable de los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos a las cuentas separadas donde se lleva la contabilidad de los servicios públicos domiciliarios que presta el municipio de manera directa y para cada uno de los mismos, habida cuenta de que sólo limita a

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

señalar que se "efectuó cobros por concepto de subsidios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por parte de la Unidad de Servicios Públicos, los cuales fueron girados al Fondo de Solidaridad y Redistribución del ingreso (...)".

A continuación se adjuntan imágenes del reporte y la certificación que se cargó en el formato antes señalado.

Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI		consulta de información						
República de Colombia								
AAA/Comercio CERTIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE RECURSOS FSRI AAA PDF								
(Para formato HTML) N° Registros en pantalla todos		Generar reporte en formato XLS HTML PDF CSV						
Año	2012							
Departamento	BOYACA							
Municipio	SANTA SOFÍA							
Servicio	sin escogencia							
CERTIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE RECURSOS FSRI AAA PDF								
Año	2012							
Departamento	BOYACA							
Municipio	SANTA SOFÍA							
ID	ALCALDÍA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AÑO CERTIFICACIÓN	ESTADO DE CARGUE	FECHA DE CERTIFICACIÓN	ENLACE DE LA INFORMACIÓN REPORTADA	SERVICIO
90290		BOYACA	SANTA SOFÍA	2012	Certificado	2013-07-27	certificacion subsidios 2013.pdf	ACUEDUCTO
90290		BOYACA	SANTA SOFÍA	2012	Certificado	2013-08-15	CERTIFICACIÓN DE TESORERÍA.pdf	ALCANTARILLADO
90290		BOYACA	SANTA SOFÍA	2012	Certificado	2013-08-15	CERTIFICACIÓN DE TESORERÍA.pdf	ASEO

LA SUSCRITA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA- BOYACA

CERTIFICA

Que la Alcaldía del municipio de Santa Sofía-Boyacá durante la vigencia 2012 efectuó cobros por concepto de subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la Unidad de Servicios Públicos, los cuales fueron girados al Fondo de Solidaridad y Redistribución del ingreso como se relaciona a continuación:

Ahora bien, con el recurso el municipio allegó certificación de fecha 28 de abril de 2014, expedida por la tesorera del municipio de Santa Sofía, en la cual hace constar que el municipio giró subsidios a la Unidad de Servicios Públicos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012; acto seguido aporta certificación del contador del municipio de fecha 29 de abril de 2014, donde certifica que en la vigencia 2012, los subsidios de los meses referidos, fueron girados desde el FSRI a la Unidad de Servicios Públicos.

Así las cosas, de lo manifestado por el impugnante en el recurso y de las certificaciones en comento, se evidencia que el FSRI no funcionó entre los meses de enero a septiembre de la vigencia a certificar, razón suficiente para considerar como no acreditado el criterio relacionado con la puesta en funcionamiento del FSRI.

4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.

Argumenta el señor alcalde de Santa Sofía, que debido a un error involuntario se reportó en el SUI un acto de aprobación de tarifas equivocado, haciendo referencia al Acuerdo Municipal No. 005 del 3 de junio de 2011, toda vez que la Resolución No. 204 del 10 de octubre de 2012, que allega como prueba con el presente recurso, es el acto administrativo mediante el cual se aprueban y adoptan los estudios tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Ahora bien, de lo revisado en el SUI, se encontró que el municipio cargó el día 29 de julio de 2013, el Acuerdo Municipal No. 005 del 3 de junio de 2011, mediante el cual se adopta la estructura tarifaria y el plan de transición tarifario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, sin embargo, el mencionado acto administrativo no fue tenido en cuenta dentro del proceso de certificación que nos ocupa, por cuanto el Concejo Municipal no se constituye como entidad tarifaria local, según lo preceptuado en el artículo primero de la Resolución 271 de 2003 emitida por la CRA.

A continuación se adjunta imagen del reporte y el Acuerdo:

Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI		aseo						
República de Colombia		consulta de información						
aseo/Comercio/Información PDF-TIFF								
Para formato HTML, N° Registros en pantalla todos		Generar reporte en formato						
Departamento BOYACA		documento de trabajo						
Municipio SANTA SOFIA		calidad del reporte						
Empresa UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA-BOYACA		XLS HTML PDF CSV						
Formato Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD 15085 de 2009)								
Información PDF-TIFF								
Departamento								
Municipio								
Empresa								
Formato								
171								
ID_EMPRESA	EMPRESA	FORMATO	ARCHIVO	ESTADO DEL CARGUE	PERIODICIDAD	AÑO DE REPORTE	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CERTIFICACION
883	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA-BOYACA	Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD 15085 de 2009)	ACUERDO DE TARIFAS Y ALCANTARILLADO 2011-2013	NO	Anual	2012	1	2013-07-29

ACUERDO N° 005 10 3 JUN 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA TARIFARIA Y EL PLAN DE TRANSICIÓN TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA-BOYACÁ, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS APROBADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

No obstante lo anterior, el municipio allegó como prueba con el recurso de reposición, la Resolución No. 024 de 10 de octubre de 2012, por medio de la cual se aprueban y adoptan los estudios tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Santa Sofía, acto administrativo expedido por la entidad tarifaria local antes de la fecha máxima de cargue, establecida por el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013, situación que en conjunto con el cargue dentro del plazo en comento que el municipio realizó (29 de julio de 2013), se constituyen en razones suficientes para que este despacho tenga como cumplido el criterio relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.

4.3. Otros argumentos señalados por la recurrente

Solicita el impugnante la aplicación del principio buena fe, e invoca como fundamento de sus argumentos jurisprudencia del derecho sancionatorio y disciplinario, orientada a soportar " (...) que debe existir un nexo funcional derivado del deber específico que le compete y además psicológico entre el autor y la conducta endiligada, como también una actuación dolosa o culpable del implicado para poder atribuir responsabilidad disciplinaria y derivar de ella una sanción de esa naturaleza (...)".

En lo referente a la observancia de la buena fe, este despacho considera necesario poner de presente, que la SSPD en cada actuación que desempeña, vela por la aplicación no solo de las normas que rigen su ejercicio sino también de los principios desarrollados por vía legal y

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

jurisprudencial, sin embargo, siguiendo los lineamientos que gobiernan el presente asunto, no puede tener como válidos aquellos documentos que la ley no contempla para acreditar uno u otro criterio, pero sí puede, en virtud de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, analizar casos específicos, que dados supuestos fácticos especiales pueden satisfacer lo dispuesto por la norma, como sucedió con el requisito relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, el cual a la luz de lo que reposa en el SUI, y lo allegado por el municipio con el recurso, fue tenido como cumplido.

En relación a la jurisprudencia que en su defensa invoca el recurrente, referente al derecho sancionatorio y disciplinario, esta entidad le recuerda que el proceso de certificación que nos ocupa, reviste una función meramente administrativa por medio de la cual la SSPD revisa la información que el municipio reporta para acreditar el cumplimiento de los criterios señalados en el Decreto 1639 de 2013, a fin decidir sobre la administración de los recursos del SGP- APSB, lo anterior para referir que la competencia de juzgar las conductas de los funcionarios públicos, no es de nuestro resorte, y nada tiene que ver con nuestra función, motivo por el cual el argumento aducido en éste sentido no es de recibo.

Adicionalmente, esta SSPD le aclara al recurrente que el proceso de certificación es una actuación administrativa que tiene como fundamento el debido proceso administrativo.

Ahora bien, es preciso señalar que el proceso de certificación es una actuación que se adelanta en estricto cumplimiento de las disposiciones legales teniendo a cada municipio de manera independiente y para cada ente territorial se analizó el cumplimiento de requisitos para efectos de obtener la certificación de la vigencia 2012.

Dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria, por ello, las normas procesales que se deben aplicar al presente proceso de conformidad con el artículo 8° del Decreto 1639 de 2013, son las consagradas en el procedimiento administrativo general y no en el sancionatorio como en forma equivocada se pretende hacer ver.

La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, confiere a las autoridades del sector de servicios públicos la facultad de producir, unilateralmente, actos administrativos particulares y generales; por eso consagra reglas especiales sobre procedimientos administrativos, las cuales están previstas en los artículos 106, 115 y se relacionan con los actos de carácter particular y concreto que las autoridades pueden producir, como lo son las sanciones.

El artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene las funciones de vigilancia, control y sanción de las empresas de servicios públicos domiciliarios; a su vez, el artículo 81 de la misma le consagra las sanciones que puede imponer la SSPD a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Así las cosas, y debido a que la descertificación de los municipios no se encuentra señalada como una sanción de las que pueda imponer esta superintendencia en virtud del ejercicio de la facultad sancionatoria, se aplican las normas del proceso administrativo general y no las del proceso administrativo sancionatorio, se reitera.

4.4. Solicitud especial de nulidad

Por considerar el recurrente, que no se garantizó el debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, solicita se declare la nulidad de lo actuado dentro del presente trámite administrativo.

De cara a tales argumentos, esta entidad inicia señalando que el artículo 29° de la Constitución Política, consagra el derecho al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; ahora bien, esta garantía procesal reconocida a la persona (natural o jurídica, pública o privada), tiene como finalidad que no pueda resultar perjudicada por decisiones de la autoridad que desconozcan las oportunidades establecidas por la ley para intervenir y defenderse.

Ahora bien, teniendo como pilar de las actuaciones administrativas, como la que nos ocupa, el respeto por el debido proceso, haremos referencia a lo que se ha denominado debido proceso administrativo; al respecto, la Honorable Corte Constitucional señaló: *"Así, a partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende como un conjunto de actos*

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad".¹

Así mismo, el máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, en sentencia T-2.897.231 de 2011, manifestó que son garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.

Con fundamento en el señalado y revisado el procedimiento llevado a cabo por esta superintendencia, el cual terminó con la descertificación del municipio de Santa Sofía, se estableció que el proceso adelantado en el marco de la certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB, para la vigencia 2012, cumplió a cabalidad con los presupuestos exigidos por la norma constitucional y jurisprudencial, acerca de las garantías que aseguran el debido proceso, a saber:

Esta entidad con oficio SSPD 20134010142441, del 27 de marzo de 2013, le informó al alcalde del municipio de Santa Sofía, las obligaciones a cargo de la administración municipal frente al cargue de información al SUI para los procesos de certificación en coberturas mínimas y SGP – APSB (vigencia 2012), además de hacerle referencia a los requerimientos realizados por la PGN en las Directivas 015 de 2005 y 05 de 2008; así mismo con el citado oficio se le informó al burgomaestre que el diagnóstico de su municipio para el proceso de certificación SGP-APSB. Es decir, al ente territorial se le comunicó oportunamente del procedimiento y requisitos para obtener la certificación en mención.

De igual manera, el auto de apertura del proceso SGP-APSB, vigencia 2012, número SSPD 20134010009926, del 20 de septiembre de 2013, fue comunicado al municipio con oficio SSPD 20134010609731 y remitido por correo certificado el 26 de septiembre de 2013.

El anterior procedimiento se efectuó, se reitera, para que el municipio de Santa Sofía presentara ante la superintendencia la información y documentación que acreditara el cumplimiento de los criterios señalados en el Decreto 1639 de 2013.

Ahora bien, una vez expedida la Resolución de descertificación No. SSPD 20144010009005 del 31 de marzo de 2014, este acto administrativo fue debidamente motivado y notificado a los interesados de conformidad con los presupuestos de Ley, para lo cual se le brindó al ente territorial la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y por consiguiente, de impugnar la decisión, al advertirle que contra la decisión adoptada procedía el recurso de reposición, recurso que aquí se decide.

Igualmente debe señalarse que esta superintendencia es la autoridad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1176 de 2007.

Así pues, resulta claro que la Resolución No. SSPD 20144010009005, del 31 de marzo de 2014, no es un acto violatorio del debido proceso, y por el contrario, constituye una muestra evidente de su desarrollo y de la aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que rigen las actuaciones administrativas.

En consecuencia, al no encontrarse vulneración de norma alguna aplicable a la materia, el argumento del municipio NO está llamado a prosperar.

¹ Corte Constitucional. Sentencia C -610 del 1 de agosto 2012. MP Luis Ernesto Vargas Silva

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento de los requisitos que se le demandan; advirtiendo el cumplimiento del criterio relacionado con el acto de aprobación de tarifas, por lo tanto, el recurso formulado por el señor William Gustavo Parra Merchán, como alcalde municipal de Santa Sofía, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010009005, del 31 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de Boyacá, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides Quevedo - Contratista Grupo de Certificaciones e información
Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e información
Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e información
Visto Bueno: Martha Lucía Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Expediente: 20094011575580297A